

ESTUDIO

del proyecto de ley reglamentando

las

Cajas de Ahorros

no sujetas

al patronato del Estado

por

Arturo López Argüello

Director Gerente del Banco Castellano



VALLADOLID
Imprenta Castellana

1915

Ayuntamiento de Madrid

FM 2843

FM 2813

ESTUDIO
DEL PROYECTO DE LEY REGLAMENTANDO
LAS CAJAS DE AHORROS NO SUJETAS
AL PATRONATO DEL ESTADO

ESTUDIO

del proyecto de ley reglamentando

las

Cajas de Ahorros

no sujetas

al patronato del Estado

por

Arturo López Argüello 58/13614

Director Gerente del Banco Castellano



VALLADOLID
Imprenta Castellana

1915

Ayuntamiento de Madrid

El proyecto

El señor Ministro de Hacienda ha leído en el Congreso un proyecto de ley estableciendo que las Cajas de Ahorros no sujetas al patronato del Estado queden sometidas en lo sucesivo á la vigilancia del Gobierno.

Cree el Ministro que precisamente por la importancia que han llegado á tener las Cajas de Ahorros, y por la misión social que cumplen, no puede el Estado permanecer indiferente á su funcionamiento, dejando por tal modo que el principio de libertad del comercio pueda, por imprevisiones ó errores, comprometer los modestos capitales que acudan á las mismas.

A este fin, se establece en la futura ley que el Ministro de Hacienda ejerza en lo sucesivo la alta inspección y vigilancia de estas Cajas, concretada al examen de la inversión que hayan dado á los capitales aportados por sus imponentes. La anterior inspección se verificará mediante la remisión al Ministerio de los Balances y Memorias, que examinará la Administración, pudiendo ésta reclamar los antecedentes que considere precisos, y aun acordar la revisión de la contabilidad de los establecimientos respectivos.

Para la mayor facilidad de esta revisión, los establecimientos interesados separarán de su contabilidad total la correspondiente á su Caja de Ahorros.

A partir de la promulgación de la ley, las únicas inversiones autorizadas serán:

Fondos públicos.

Obligaciones y cédulas de renta fija

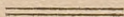
Créditos pignoratícios ó hipotecarios.

Las demás inversiones que especialmente autorice el Ministerio de Hacienda á solicitud de las mismas Cajas.

Los valores deberán ser cotizables en las Bolsas nacionales, y su cotización no podrá bajar del 50 por 100 de su valor nominal ni exceder de la par.

En ningún momento serán permitidas operaciones de crédito personal.

Concede el proyecto un plazo de tres años para que las entidades cuyas carteras no se acomoden á la nueva ley, queden ajustadas á sus preceptos.



Antecedentes del proyecto

La anterior reglamentación de las Cajas de Ahorros *bancarias*, llamándolas así para distinguirlas de las *benéficas* ó sujetas al patronato oficial, ha sido reclamada con tenaz insistencia, en diferentes ocasiones, no por representaciones de los imponentes, como parecía lógico, sino por las Cajas de Ahorros de carácter benéfico que, bien funcionando aisladamente ó unidas á Montes de Piedad, están reguladas por la ley de 29 de Junio de 1880, Real Decreto de 14 de Marzo de 1899 é Instrucción de la misma fecha.

En 19 de Octubre de 1908, don Calixto de Rato y Rocés, Presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gijón—que en la actualidad se halla en estado de suspensión de pagos—, elevó al Ministerio de la Gobernación una instancia lamentándose de la competencia que hacían á las Cajas de Ahorros incorporadas á los Montes de Piedad las de carácter mercantil organizadas y explotadas por establecimientos bancarios, diciendo que éstas son á aquéllas lo que las casas de préstamos á los Montes de Piedad; consideraba faltas de garantía las imposiciones hechas en las Cajas de los Bancos, y llamaba sobre esto la atención del Gobierno, pidiéndole que vigilara por esa sagrada propiedad, disponiendo en definitiva su con-

servación en reservas formadas por valores públicos.

En parecidos términos se expresó también en instancia dirigida al mismo departamento ministerial en 18 de Junio de 1910, el señor don Florencio Jardiel, Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, quien, insistiendo en otra solicitud que había elevado en Julio del año anterior, pide la reglamentación de las Cajas de Ahorros establecidas con fines especulativos, en forma parecida á la en que se habían reglamentado las casas de préstamos. Repite los grandísimos riesgos que corre el capital entregado á las Cajas de Ahorros de los Bancos, y, como el de Gijón, propone que se afiancen las imposiciones.

A la asamblea celebrada en Madrid el 21 de Marzo de 1911 por los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros, se llevó—también por el canónigo señor Jardiel, antes citado, que se ha distinguido siempre por su acometividad hacia las Cajas de Ahorros bancarias—una proposición de petición al Gobierno para que prohibiera usar el nombre de «Cajas de Ahorros» á todos los establecimientos no sometidos al Patronato oficial, los reglamentara minuciosamente y los gravara con un nuevo impuesto que les imposibilitara la competencia con las Cajas de Ahorros benéficas.

La propuesta anterior no fué tomada en consideración por la asamblea.

En la segunda Conferencia Nacional de

Cajas de Ahorros celebrada en Madrid el 24 de Enero de 1914, se aprobó la siguiente conclusión:

«Queda prohibido á toda otra entidad particular la adopción ó el uso de los títulos »de Caja ó Instituto de Ahorros y Caja ó »Instituto de Previsión de Pensiones de re- »tiro ó de Seguro Social.»

Fué aprobada por mayoría. Votaron en contra las Delegaciones de la Caja provincial de Guipúzcoa y las de Santander, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Oviedo y León. Se abstuvieron las de Salamanca, Valladolid y Palma. El deseo de los iniciadores de la anterior proposición era que se prohibiera á los Bancos la práctica del ahorro, pero no pudo prevalecer ese criterio por haberse manifestado terminantemente en contra de él el Instituto Nacional de Previsión, presidido entonces por el actual jefe del Gobierno don Eduardo Dato.

De los antecedentes que quedan expuestos, se deduce que el proyecto que examinamos no es de la iniciativa del señor Ministro de Hacienda. La presentación del mismo viene persiguiéndose con ahinco mucho tiempo hace por las Cajas de ahorros benéficas, con objeto de dificultar, y si es posible impedir, la práctica del ahorro á los Bancos locales.

Las Cajas de Ahorros bancarias

Estos organismos no son instituciones independientes. Forman parte integrante de los bancos á que pertenecen y, siendo de origen moderno, han sido ya tan favorecidos por el público, que han llegado á reunir en sus cajas 293 millones de pesetas, importante cifra que se va acercando más cada vez á la de las cuentas corrientes de los mismos, las cuales en fin de 1913 sumaban 424 millones de pesetas.

El capital desembolsado de los 47 Bancos que forman la estadística anterior—sin tener en cuenta el capital escriturado, ni aun el suscrito y no pagado—era en la misma fecha de 242 millones de pesetas. Los fondos de reserva ascendían á 49 millones.

El modo de funcionar de las Cajas de Ahorros bancarias es el siguiente:

Reciben imposiciones hasta llegar en cada libreta á formar la cantidad de 5.000 ó 10.000 pesetas como máximum, abonando por ellas un interés variable, que oscila de 2 y $\frac{1}{2}$ á 3 y $\frac{1}{2}$ por 100. Los reintegros suelen verificarse en el acto de su reclamación. Los fondos así recibidos son invertidos en las operaciones bancarias corrientes: descuento y negociación de efectos comerciales, préstamos y cuentas corrientes con garantía de valores, créditos con garantía de buenas firmas y valores de renta Todas, me-

nos la última, con vencimiento máximo de noventa días. Los préstamos y créditos hipotecarios, como acostumbran á hacerse por un plazo largo—para que no resulten onerosos por los cuantiosos gastos que llevan aparejados—, son practicados por los Bancos con mucha circunspección, por lo que tienen de inmovilizados, y, ó se abstienen de concederlos, ó los verifican únicamente con fondos procedentes de su capital y reservas. Las inversiones antes enumeradas, se han colocado por el orden de preferencia que suelen merecer á los Bancos y banqueros. Estos, no compran valores para guardar en su cartera, más que á falta de las colocaciones precedentes, pues aparte del interés que tienen en evitarse el riesgo que supone la oscilación de las cotizaciones, estiman acertadamente que no han sido fundados los Bancos para «cortar el cupón», sino para proteger y fomentar con sus caudales el comercio, la industria y la agricultura de su región.

Estas Cajas desempeñan, por consiguiente, una doble función social: el fomento del ahorro y el fomento del crédito. Consiguen la primera, como ya se ha visto, recogiendo y haciendo productivas las pequeñas economías de las clases populares, que sin el concurso de las Cajas, quedarían estérilmente atesoradas y constituyendo además un constante incentivo al hurto y al robo. Logran la segunda, mediante sus descuentos, préstamos y créditos á comerciantes, industriales y agricultores, liberándoles de los tipos y

contratos usurarios, ejerciendo sobre ellos una fiscalización eminentemente educadora, y siendo, por consecuencia, en todo el territorio donde alcanza su actuación, un poderoso propulsor de su progreso material y moral.

De estas dos funciones, la más importante es la segunda, pues sin desconocer cuán digna de alabanza y de protección es la virtud del ahorro (siempre que un exagerado apasionamiento por ella no llegue á convertirla en vicio, como nuestros vecinos los franceses pudieran testimoniar), éste quedaría improductivo sin el concurso del trabajo que le hace fructificar.

Los intereses que percibe al final del año el imponente de una de estas Cajas de Ahorros, son producidos por el trabajador á quien el Banco entregó los fondos. Lo que importa, pues, preferentemente es el fomento del trabajo, fuente de toda prosperidad. Se ha dicho muchas veces que el capital es hijo del ahorro; pero hace falta decir también que el ahorro á su vez es hijo del trabajo, y por delante de la protección al trabajo, del respeto al trabajo, del amor al trabajo, no se puede anteponer, económicamente, ningún otro orden de consideraciones.

Constituyen, pues, las Cajas de Ahorros bancarias precioso instrumento de la circulación de la riqueza y son verdaderamente respetables en su organización actual, más que por lo que al ahorro estimulan, por lo que alientan é impulsan el trabajo nacional.

Las Cajas de Ahorros benéficas

Hay en España actualmente 88 Cajas de Ahorros benéficas y 62 Montes de Piedad. Aun cuando en sus orígenes estas dos clases de instituciones existían separadamente, hace ya mucho tiempo que, en nuestra nación, la mayor parte de ellas funcionan unidas, es decir que un mismo establecimiento es á la vez Caja de Ahorros y Monte de Piedad.

En fin de Diciembre de 1913 tenían recibidos del público 344 millones de pesetas. No puede precisarse el capital y reservas con que cuentan, aunque desde luego puede afirmarse que es excesivamente inferior al que constituye la responsabilidad de las Cajas de Ahorros bancarias. En la Memoria anual del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, se publica una estadística de imposiciones recibidas y préstamos efectuados por todas las Cajas benéficas de España, pero no se menciona el capital y reservas propios, dato el más importante, puesto que representa el fondo de garantía con que estos institutos responden á sus acreedores.

La forma de funcionar de las Cajas benéficas es la siguiente:

Reciben, como las Cajas de los Bancos, imposiciones hasta sumar en cada libreta la cantidad de 5.000 ó 10.000 pesetas como

máximum, abonando por ellas el 3 por 100 como norma general. La mayoría de las Cajas no despachan más que los domingos por la mañana, y los reintegros deberán ser solicitados con ocho ó quince días de anticipación. Los fondos así recibidos son invertidos en préstamos sobre alhajas, ropas y efectos, cuando á la Caja de Ahorros va unido un Monte de Piedad, préstamos sobre valores y préstamos hipotecarios, no obstante la inmovilización que estos últimos suponen. Salvo alguna excepción, que después señalaremos, no practican el crédito personal. La inversión favorita de estos establecimientos son los valores de renta, principalmente los fondos de Estado, hasta tal punto, que de los 344 millones á que ascienden las sumas recibidas de sus imponentes, sólo tienen aplicados á préstamos 28, hallándose representados los 362 sobrantes por valores de cartera.

El patrón de estos establecimientos es el Monte de Piedad de Madrid, que en 31 de Diciembre último tenía la siguiente situación:

Imposiciones..... 52,706.655,32

Capital y reservas..... 17.829.763.99

invertidos principalmente en:

Préstamos sobre prendas. 13.819.807,00

Edificios 3.226.738.77

Valores públicos. 53.823.930,00

Como se ve, la técnica de estas arcaicas fundaciones no puede ser más descansada para sus directores; se reduce á comprar papel si las imposiciones aumentan ó los préstamos disminuyen, ó á venderlo—ó pig-

norarlo si fuere baja su cotización—en el caso contrario.

Esta vida sosegada y apacible, no está exenta, sin embargo, de sustos, como el que habrán pasado recientemente al ver depreciarse espantosamente la estimación de los valores, llegando quizá ese menosprecio á absorber el capital y reservas, y hasta parte de los fondos de los imponentes.

Las Cajas de Ahorros benéficas no desempeñan, pues, la doble acción social que antes hemos visto ejercer á las bancarias. No fomentan el crédito y se limitan solamente á cultivar el ahorro, función, por otra parte, que llenan de un modo imperfecto, dando lugar con ello á un desfile continuado de su clientela hacia las Cajas de los Bancos en donde encuentran más garantía, mayor rapidez en las devoluciones y en muchos casos mayor productividad.

El ahorro depositado en las Cajas benéficas no se hace productivo más que mediante un artificio sin sólida base económica. Los intereses que percibe al final del año el imponente de una de estas Cajas no son fruto directo del trabajo; proceden de los tributos y contribuciones con que el Estado provee al cupón de su Deuda. Es el Estado el receptor de los fondos de los imponentes en su casi totalidad, y para llegar á esta sencilla finalidad podría suprimirse de una vez el organismo intermedio, evitando los gastos de su administración por inútiles y onerosos.

Esta técnica fósil, que desde luengas épo-

cas viene rigiendo el funcionamiento de las Cajas benéficas, ha sido insistentemente censurada por cuantos economistas se han ocupado detenidamente de estas importantes materias, invitando reiterada, aunque inútilmente, á estos institutos á practicar el crédito popular, para extinguir la usura y dar mayor garantía al caudal de sus acreedores, ya que por la teoría de la división del riesgo, ha de hallarse más seguro distribuido entre un gran número de deudores que en manos de uno solo, siquiera este único deudor sea un Estado respetado y solvente. De lamentar es que á esta equivocada política venga á prestarla actualmente sanción oficial el proyecto de ley objeto de este estudio.

El público, pues, con certero instinto, viene mostrando su predilección hacia las Cajas de Ahorros bancarias, por encontrarse en ellas mejor servido y más garantizado que en las sujetas al patronato oficial, siendo muy de notar que los Bancos logran este favor no obstante hallarse abrumados por cuantiosos y desproporcionados tributos, tres de los cuales solamente—la contribución sobre los beneficios, el impuesto sobre el dividendo y el de timbre de circulación—absorben anualmente el 18 por 100 de sus ganancias, mientras que las Cajas benéficas trabajan en un régimen de privilegio, sin hallarse sujetas á impuesto alguno. Las Cajas de Ahorros bancarias son, por consecuencia, un apreciable manantial de recursos fiscales, mientras que las benéficas

son fuerzas muertas á los efectos de la nutrición y expansión de las rentas públicas.

Es justo decir que no todas las Cajas benéficas han permanecido dentro de los estrechos y anticuados moldes antes descritos. Algunas, muy pocas, apartándose del gastado patrón, han empezado francamente á funcionar como Bancos populares. Entre ellas merece especial mención el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León, que con una práctica intensa del crédito personal han matado en aquella provincia el préstamo usurario antes enseñoreado de ella. Dicho proceder ha merecido de continuo los elogios de propios y extraños, no siendo los menos calurosos los que con ocasión de la celebración en aquella ciudad de la sesión anual del Instituto Nacional de Previsión, prodigaron á esta benemérita institución los señores don Gumersindo Azcárate y don Eduardo Dato.

Otros institutos de ahorro

Además de los dos grandes grupos de Cajas de que nos venimos ocupando, funcionan en España otras instituciones de constitución distinta, pero que buscan también sus disponibilidades en el ahorro popular. Son las principales: las Cajas rurales Raiffeisen-Chaves, las Cajas de Rivas Moreno, las Cajas rurales de la acción social católica, la Caja de Crédito de la Asociación de labradores de Zaragoza, etc., etc.

Los mismos *Pósitos* están facultados por el artículo 2.º de la Ley de 23 de Enero de 1906 para funcionar como Cajas rurales de ahorros y préstamos.

Disponiéndose en el artículo 7.º del proyecto, que quedarán sujetas á las prescripciones de la nueva ley «todas las entidades, cualquiera que sea el nombre que den á sus operaciones, que de alguna forma operen de la manera peculiar que corresponde á las Cajas de Ahorros», claro es que las Cajas rurales antes enumeradas y hasta los mismos *Pósitos*—ya que esta ley deroga las anteriores—quedarán obligados á invertir sus fondos en valores y á no practicar operaciones de crédito personal. Pero siendo el crédito agrario sin garantía la finalidad de estas instituciones, la nueva ley habrá suprimido la razón de su existencia decretando su muerte forzosa.

Existen además otros organismos, desclasificados, que nutren también sus cajas con las economías de las clases modestas y que se constituyen como cooperativas de ahorro, sociedades anónimas de capital variable ó en cualquier otra forma poco usual. No puede emitirse sobre la función que llenan en la economía nacional, una opinión sintética, pues por su diversidad de régimen, exigen ser estudiados separadamente, tarea larga y delicada de la que creemos prudente abstenernos por ahora.

Inversiones autorizadas por el proyecto

Antes de entrar á examinar la naturaleza de las inversiones enumeradas en el proyecto convendría precisar el alcance que ha de tener la facultad que el ministerio de Hacienda se reserva para autorizar, á instancia de las mismas Cajas, otras inversiones no detalladas en la ley. Si el Ministerio de Hacienda ha de acceder en lo sucesivo á todas las inversiones que se soliciten, sobra el proyecto de ley; si no ha de conceder ninguna, sobra la facultad que se ha reservado; y si ha de conceder unas sí y otras no, sobra la enumeración hecha en la ley. Si con esta reserva se ha pretendido únicamente poner á los Bancos, en este importante aspecto de sus trabajos, bajo la autoridad y dirección del Ministro de Hacienda, no se hable de inversiones y dígase clara y concisamente que el Ministerio de Hacienda dispondrá en cada caso el empleo que ha de darse á los fondos de los imponentes.

Pero ya que en el proyecto de ley se hizo enumeración de inversiones, sorprende á primera vista no ver incluido en ella el descuento mercantil á 90 días; la más segura, puesto que tiene detrás como prenda la mercancía que le da origen; la más movi-

lizable, puesto que un simple endoso la convierte instantáneamente en numerario, la más regulada por las leyes, puesto que tiene como instrumento á la letra de cambio que, por su antigüedad, ha llegado á gozar en todos los países de una legislación casi perfecta. Es el descuento mercantil la inversión por excelencia, la preferida, la primera en el orden financiero, la que por ser la más buscada produce menos interés, y admira verdaderamente verla eliminada de esta ley, cuando al propio Banco de España se le admite como garantía de sus billetes en el artículo 4.º de la ley de 13 de Mayo de 1902.

A juzgar por lo que en el preámbulo del proyecto se dice, la nueva ley se ha inspirado en el deseo de buscar una mayor seguridad á los modestos capitales que acuden á las Cajas de Ahorros. ¿Pero es que la inversión en valores conduce á ese resultado? ¿Es que puede considerarse como de más garantía la colocación de esos modestos capitales bajo la responsabilidad de dos, tres, diez ó veinte firmas de las entidades emisoras de esos valores, que bajo la solvencia de miles de firmas de comerciantes, agricultores, mineros, fabricantes, navieros, etc. que componen actualmente la carteras bancarias de efectos? ¿Es que la oscilación continuada de la cotización en Bolsa de esos valores no trae aparejado el riesgo constante de la pérdida de una parte del capital en el momento de su enajenación, mientras que los efectos y créditos de los

Bancos deben ser pagados por su totalidad á su vencimiento?

¡Y este proyecto ordenando la inversión en valores viene á proponerse cuando todos ellos están en crisis, cuando las Bolsas no funcionan, ó lo hacen con tasa mínima en los cambios, cuando no puede graduarse, por consiguiente, la verdadera estimación de los títulos y su compra constituye una aventurada especulación que puede dar por resultado grandes beneficios ó grandes quebrantos! ¡Y para arrojarse en este riesgo temerario se exige que se retiren al trabajo, á la producción nacional cientos de millones, agravando formidablemente con ello la angustiosa crisis de crédito porque en la actualidad atraviesa!

La razón de la limitación que el proyecto establece para las obligaciones cotizables en Bolsa, previniendo que no han de obtener un aprecio inferior al 50 por 100 ni superior á la par, no es fácil de alcanzar. Dificilmente se concibe, en efecto, por qué las cédulas del Banco Hipotecario han de ser descalificadas cuando coticen á 100,05 mientras siguen admitiéndose otras obligaciones que por su mala calidad hayan perdido en el mercado el 49 por 100 de su estimación.

Por otra parte, la proximidad ó lejanía de la cotización al valor nominal no prejuzga nada si no se atiende á la vez al tipo de interés nominal. Es indudable que merecen mejor concepto al mercado obligaciones 3 por 100 que se coticen á 49, que obliga-

ciones 6 por 100 que no se paguen más que á 51, y, sin embargo, el proyecto rechaza las primeras y admite las segundas.

Las operaciones hipotecarias que el proyecto autoriza han debido ser excluidas de él. Los préstamos y los créditos con hipotecas de fincas rústicas ó urbanas, no son practicables á corto plazo, porque los gastos y los impuestos que implican elevarían el interés á tipos ruinosos. Suelen verificarse á dos años de plazo como minimum, y lo general es que se hagan de cinco años en adelante. Colocando á tan largo vencimiento los capitales que se han recibido con obligación de devolver á la vista ó á plazo corto, el establecimiento que siga esta imprudente conducta corre el riesgo, ante una demanda de fondos, de no poder cumplir sus compromisos.

La intervención oficial

El intervencionismo del Estado en la esfera de la actividad privada, muy principalmente en la económica, requiere, para ser saludable, grandes condiciones de capacidad en el Estado interventor.

Si existe la más ligera sospecha sobre la competencia, la moralidad y el espíritu de justicia de los funcionarios que le representen, preferible es la abstención, porque, en caso contrario, los ciudadanos no verán en la intromisión del Estado una garantía de recta administración, sino un arma al servicio del cacique y de la política al uso.

La nueva ley sujeta á los Bancos en sus operaciones de ahorros á la vigilancia inmediata de los inspectores de la hacienda pública. Para facilitar esta vigilancia se llega hasta retirarles las garantías que en su calidad de comerciantes les concede el artículo 45 del Código de Comercio al disponer que no podrá hacerse de oficio por Juez ó Tribunal ni autoridad alguna investigación ó examen de su contabilidad.

El patronato oficial no ha sabido evitar que bien recientemente las Cajas de Ahorros benéficas de Jerez, Gijón y Zamora hayan dejado incumplidas sus obligaciones, con grave detrimento de los intereses de su clientela,

La historia económica de España enseña con toda claridad cuán funesto ha sido siempre el patronato ó tutela del Estado sobre los organismos de crédito. En 1558, cuando en ninguna nación de Europa se había oído hablar siquiera de instituciones de crédito popular, funcionaban en España 12.000 *Pósitos*, que prestaban incalculables beneficios á la agricultura. De esa fecha data la primera reglamentación legal de los *Pósitos*, dada por Felipe II, y á partir de entonces comenzó su decadencia. No es ocasión esta de enumerar detenidamente el aluvión de disposiciones legales de que los pobres *Pósitos* han sido víctimas, pero aun cuando sea á la ligera, conviene citar concisamente algunos datos reveladores de lo que ha significado para ellos la protección y vigilancia del Estado.

En 1783 se les hizo contribuir con 20 millones de reales á la fundación del Banco de san Carlos, antecesor del de España.

En 1.799 se les exigió por el Gobierno un *donativo forzoso* del 20 por 100 de sus existencias.

En 1800 entregaron al Rey, á título de contribución extraordinaria, 48 millones de reales.

Durante la guerra de la Independencia el dinero de los *Pósitos* sirvió para equipar y mantener las guerrillas.

En la terrible epidemia de cólera, posterior, el Estado recurrió de nuevo á los *Pósitos*, autorizando á los Gobernadores y Juntas de Sanidad para disponer de sus fondos.

En 1838 se les exigió para los gastos de la guerra un anticipo de seis millones de reales que no fué reintegrado.

En 1839 se decretó por una ley que todos los caudales de los *Pósitos* se pusieran á disposición de las Diputaciones para atender al armamento y defensa de las provincias y al sostenimiento de las milicias movilizadas.

Aun vivían, verdadero milagro, estos beneméritos institutos en 1877, y la ley de 26 de junio de aquel año, para ver si podía acabar con ellos, dispuso que el caudal de los *Pósitos* fuera administrado por los Ayuntamientos.

Todavía subsisten en la actualidad 3.500 *Pósitos* con un capital de 95 millones de pesetas, incobrables en su mayor parte.

Esta institución gloriosa, que llegó á tener en sus arcas un capital de 500 millones de reales, cuantiosa suma que aumentada en sus creces durante tantos y tantos años, hubiera provisto amplia y superabundantemente á las necesidades de crédito agrícola en toda la nación, se halla hoy exangüe y expirante; muerta, puede decirse, á manos del patronato oficial del Estado.

Tal es el temor existente en España á todo lo que sea intervención del Estado en organismos económicos, que en los estatutos de la *Caja de socorros para labradores y ganaderos* fundada en Salamanca el año 1888, en virtud de disposiciones testamentarias de los Condes de Crespo Rascón, quienes dejaron todos sus bienes para el

sostenimiento de la misma, hay una cláusula, impuesta por los testadores, que dice: «si algún día el Gobierno tratara de incautarse y manejar los fondos de la Caja, la Junta los distribuirá desde luego entre los labradores pobres de la provincia, que tuvieran una sola yunta y pagaren renta por tierra ajena por no tener ninguna suya propia».

Conclusión

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, creemos que el Gobierno debe retirar el proyecto de ley presentado á la deliberación de las Cortes, ya que no solamente no viene á atenuar el malestar que han producido en nuestra nación los acontecimientos exteriores, sino que lo aumentaría por modo extraordinario, originando una nueva contracción de crédito, una intensa agravación en la crisis económica actual, de la que él únicamente sería responsable.

Valladolid, Febrero de 1915.



